

EL ESTADO Y LA POBREZA EN VENEZUELA

(The state and poverty in Venezuela)

Rosa María Hurtado Power

Universidad de Los Andes, Venezuela.

RESUMEN:

El trabajo realiza un estudio del campo político venezolano, visto como espacio en el cual, dentro del Estado y en torno a él, se da el movimiento de los actores sociales y la organización de sus intereses, en un marco histórico de conflicto. El análisis conduce a la consideración de los problemas de cambio de mentalidad, con incidencias en la educación formal y en los medios de comunicación, del desarrollo de destrezas productivas y de una racionalidad creativa para la construcción de nuevas formas de socialización con fundamento en la equidad y en la reedificación de una escala de valores.

PALABRAS CLAVE:

Estado. Pobreza. Populismo. Ética Colectiva. Racionalidad Creativa.

ABSTRACT:

This paper deals with a study of the Venezuelan political environment, seen as a space in which, inside the State and around it, the movement of social actors and the organization of their interest are given in a historic frame of conflict. The analysis convey to the consideration of the problems of mentality change, incidents in formal education and media, the development of productive skills and a creative rationality for the constructive of new forms of socialization with fundaments in equity and rebuilding of a scale of values.

KEY WORDS:

State, Poverty, Populism, Collective Ethics, Creative Rationality.

Introducción

Con este trabajo se pretende una aproximación al campo político venezolano, visto como el espacio en el que dentro del Estado, y en torno a él, se da el movimiento de los actores sociales y la organización de sus intereses, en un marco histórico de conflicto que deriva de la dinámica propia de los grupos sociales y por ende de las relaciones de fuerza en constante tensión. En la reflexión se parte del factor cultural como herramienta de análisis, por cuanto, no es posible comprender el fenómeno político sin un conocimiento previo del hecho social. Las manifestaciones concretas del poder y el comportamiento político de los actores sociales son la expresión práctica de actitudes, creencias y motivaciones humanas y constituyen, por lo tanto, una dimensión de la política. Hablar de la pobreza en Venezuela, es hablar, en buena medida de la pobreza y precariedad histórica del sistema socio-político que la engendró y que la ha

TELOS, 1 (1) 1999, Páginas 107 - 126

expandido(1). Pero esta precariedad a su vez, es el resultado de múltiples tensiones históricas, entre los fundamentos doctrinarios y prácticos del proyecto de la modernidad y la cosmovisión de las culturas tradicionales que confluyeron en el mestizaje del pueblo venezolano(2). Si bien es cierto que otros factores con intensidad variable, han incidido a conformar el estado de cosas sobre el cual discurre la realidad venezolana en la actualidad, también lo es, que ciertas tendencias conductuales predominantes, en el pasado y en el presente, la han reforzado y la han sostenido. Por ello, los determinantes económicos y políticos externos, con los cuales, durante mucho tiempo, se han intentado explicar las coyunturas y problemas de nuestra estructura Socio-Económico, bajo el esquema de las teorías de la dependencia parecen hoy insuficientes, si no se refuerzan con el análisis crítico de nuestra historia socio-política. Las formas de organización participativa de los actores sociales, son el reflejo de la conciencia nacional y ésta, a su vez, del estilo de democracia que se está dispuesto a configurar.

En Venezuela ni el Estado ni la sociedad civil muestran signos positivos de haber acuñado conciencia en torno a un proyecto nacional, con el cual poder enfrentar un franco proceso de reconstrucción política y de desarrollo económico. Por el contrario, las manifestaciones de nuestra estructura socio-política apuntan hacia la descomposición del modelo por ausencia de cohesión de las fuerzas sociales, cuyas contrapartidas son, la pobreza y la ingobernabilidad. Estas tienden a extremar su tensión, por cuanto la acción del Estado se ve limitada por la escasez de recursos para satisfacer las demandas sociales, justo cuando la implementación de severas políticas de ajustes macro económicos, con elevadísimo costo social, han agudizado todo género de confrontaciones. Además, la ausencia de voluntad política para poner en práctica planes integrales orientados a la modernización del Estado, hace presumir un aumento, en el corto plazo, de la inestabilidad política por la ampliación de los márgenes de extrema pobreza y de marginación sociocultural. Por otra parte, al no existir efectivas vías de intermediación entre el Estado y la sociedad civil, distintas de los partidos políticos, se ha creado un vacío de amplias proporciones, dada la escasa confiabilidad que ofrecen tanto el Estado como éstos. La sociedad no dispone, entonces, de ningún instrumento para expresarse en sus expectativas de respeto a las libertades públicas y a la justicia social, lo que aumenta la dispersión y el desconcierto y acentúa aún más la ilegitimidad del sistema. A primera vista pudiera pensarse que esta situación sería revertible a través de un proceso de democratización, llevado a cabo con la activa participación de los actores sociales, en el diseño de alternativas que expandan los sistemas de representación social, al mismo tiempo que se opera la modernización y racionalización del Estado. Sin embargo, esto no parece viable, al menos por ahora, debido a que las características de la estructura socio-política venezolana se sustentan en la existencia de ciertos rasgos culturales(3) comunes en los cuáles se han apoyado sus desviaciones. Esos rasgos, deformados por la influencia de un consumo cultural generalizado y homogeneizante con apoyo en la informática y en los medios masivos de comunicación, pudiera conspirar en el presente contra cualquier intento de cohesión social participativa. Por el contrario, hay signos externos bastante contundentes de que el proceso hacia la fragmentación colectiva se intensifica con la rudeza de la crisis moral y económica, conduciendo hacia una peligrosa anomia societal con pérdida de integración simbólica en lo político y en lo cultural. Tal fragmentación se acentúa con la diversidad de intereses y de expectativas que se estratifica en función de cada grupo social(4). El alarmante crecimiento del sector marginal urbano, por ejemplo, en proporción a la población total del país, con su inmensa carga de desarraigo y su modo específico de articularse socialmente, muestra una lógica que debilita la unidad de la vida social y nos lleva a

preguntarnos hasta que punto compartimos los venezolanos una racionalidad común. El culto a la violencia(5) ha instaurado un orden de cosas caótico, que atenta contra la estabilidad y perfila una aguda crisis de convivencia, la cual es expresión de lo que algunos especialistas han denominado "cultura de la urgencia"(6), caracterizada por una serie de actitudes propias de los grupos segregados que buscan contraponerse con armas ilegítimas a la ilegitimidad del sistema.

Otro ámbito donde se manifiesta con fuerza la exclusión es en la toma de decisiones nacionales. La democracia venezolana ha ido desvirtuándose a tal punto, que la participación ciudadana se ha visto totalmente desplazada por el centralismo gubernamental, llegando en algunos casos a abarcar, incluso, al Parlamento y a los partidos políticos, sobre todo en cuanto concierne a las decisiones de índole económica. Así, por ejemplo, ha sido posible comprometer al país en una serie de programas con gravísimas consecuencias futuras, sin que se tenga conocimiento previo de los mismos y sin propiciar un debate nacional que al menos los legitime. Bajo este esquema de actuación ha sido posible llevar adelante el proyecto de apertura petrolera, a través de la concesión de contratos de ganancia compartidas en crudos, livianos y medios, con las grandes corporaciones petroleras internacionales, pese a la oposición de importantes sectores representativos de la vida nacional. De igual manera, han sido posibles el endeudamiento externo; las renegociaciones de la deuda pública; la privatización de empresas del Estado y la aplicación de dos programas de ajustes macroeconómicos en un lapso de siete años; y con esta misma lógica, han podido encubrirse también la corrupción en gran escala y la billonaria transferencia de recursos de la sociedad civil al sector bancario, cuando entre 1994 y 1995, se expresó la crisis financiera en toda su magnitud: Estos aspectos han enturbiado el juego democrático poniendo de manifiesto la inexistencia de una ética de la responsabilidad, que comprometa a los candidatos electos, con los programas de gobierno presentados a la sociedad en la campaña electoral.

Por otra parte, espacios cada vez mayores de la esfera pública se ven reducidos en la misma medida, en la que se estrechan los vínculos entre el Estado y el sector privado, como consecuencia de las políticas neoliberales, mientras los niveles de pobreza e insalubridad se expanden exponencialmente; la inflación, el desempleo, la corrupción y la pérdida de referentes morales acentúa las tensiones y un sentimiento generalizado de impotencia asume en la práctica, las más variadas manifestaciones. Todo esto, se traduce en una desmovilización total de las fuerzas sociales y una ausencia de imaginario colectivo, a través del cual, pueda articularse expectativas y sentidos tan disímiles, justo cuando la disolvente racionalidad neoliberal socava las bases del proyecto político. En suma, pueden afirmarse que la contradicción fundamental de la democracia venezolana deriva del sempiterno conflicto(7) entre liberalismo y democracia, ya señalado por el politólogo norteamericano A. Wolfe(8) como el eje de conflictos insolubles que generan, la acumulación del capital bajo la orientación de la ideología liberal, y los principios de participación e igualdad, que sustentan y legitiman a la democracia. Esta contradicción se complementa con la caracterización que hace N. Bobbio(9) de los obstáculos para consolidar un auténtico proceso democrático, a consecuencia de las radicales transformaciones sufridas por la sociedad en las últimas décadas, a saber:

1. Desarrollo de la tecnocracia y suplantación de la voluntad general por la opinión de los técnicos.
2. Aumento de la burocracia e inversión de la dirección que debería asumir la toma de decisiones, suplantando a la base por la jerarquización burocrática.
3. Ingovernabilidad debido a las crecientes demandas sociales y a la escasa capacidad del sistema político para satisfacerlas.
4. El contraste entre el proceso democrático y la sociedad de masas, cada vez más complejas y manipulada, tanto políticamente, como por la industria cultural.
5. La inexistencia de un estado de derecho(10).

Esta caracterización refleja en buena medida las desviaciones de la democracia venezolana pero debe complementarse con ciertas particularidades de nuestra historia socio-política, tales como la configuración del poder hegemónico del binomio Estado-partidos políticos y la peculiar conformación de nuestra cultura política.

A continuación analizaremos estos aspectos con el objeto de que puedan comprenderse, la extrema disociación política y cultural y la degradación moral y económica por las que atraviesa la sociedad venezolana. En la última parte se incluyen algunas reflexiones acerca de los posibles modelos alternativos de desarrollo económico y participación social y su viabilidad en el caso venezolano.

I. Del Populismo al Estado

El fenómeno del populismo, cuya presencia en Latinoamérica data más de medio siglo y que ha coexistido con los venezolanos durante décadas, ha sido caracterizado por los especialistas(11) como la legitimación de un proyecto de colaboración de clase, a través de un mensaje centrado en la tradición cultural popular. Se manifiesta en sociedades en proceso de tránsito traumático de una economía rural a una industrial y urbana, nutriéndose de las masas movilizadas a causa de esta coyuntura y aglutinándose en torno a un líder carismático, quien deberá, con su personalismo, evitar los conflictos -a través de dádivas provenientes de los excedentes del sector primario-, y garantizar la colaboración de clases a favor de las burguesías emergentes. Estos rasgos se ajustan plenamente a la fisonomía del sistema político venezolano después de la muerte del dictador Juan Vicente Gómez en 1935, cuando comienzan a producirse los primeros intentos de estructuración de los partidos políticos modernos.

Vemos así como el redimensionamiento de la sociedad y de la estructura económica, que trajo consigo, hacia la tercera década de este siglo, la inserción de Venezuela en la economía capitalista mundial, a través de la explotación petrolera, sirvió de marco adecuado para instaurar la práctica populista. Campesinos en éxodo a las ciudades, una sociedad heterogénea en su composición y en sus ingresos con alto grado de migración y una clase obrera emergente, fueron los receptores primarios de un discurso dirigido a convencerlos de que había convergencia, en lo político y en lo económico, entre sus intereses y los de la oligarquía terrateniente y el gran capital. Poco a poco, este discurso elaborado sobre la manipulación simbólica y semántica, acuñó efectivos elementos de cohesión. El "pueblo", en tanto que concepto abstracto, pasó a ocupar un papel protagónico, así como las aspiraciones nacionalistas y de defensa de la justicia social. Con las transformaciones que se operaron en la sociedad venezolana debido a la explotación petrolera, se llevó a cabo la tardía institucionalización del estado liberal democrático, en los años siguientes al término de la Segunda guerra Mundial. El hecho

de que el estado haya sido el único agente modernizador tuvo dos grandes consecuencias en lo económico y en lo político. Por una parte, le imprimió al proceso modernizador una orientación equivocada al canalizar los ingresos petroleros hacia la importancia y el consumo interno de bienes de manera indiscriminada, con lo cual, la tardía instalación del parque industrial venezolano, se llevó a cabo bajo la égida del Estado y bajo el signo de la transnacionalización y la dependencia foránea, sobre todo, a nivel de los insumos y de la tecnología. Por la otra, marcó la pauta para que lo político se construyera en el eje **"... dominante de resolución de los conflictos y de manejo y conformación de la sociedad"**(12), estableciendo así la unidimensionalidad de la razón política. Finalizando la década de los años 50, gracias a la acumulación de la renta petrolera, ese Estado iba ya en camino de convertirse en el capitalista nacional por excelencia, mientras, la sociedad absorbía el cúmulo de problemas y contradicciones que, los vertiginosos cambios económicos y la aplicación de políticas erróneas, trajeron consigo.

En 1958, con el derrocamiento del dictador Marcos Pérez Jiménez, aumentaron las expectativas populares y con la emotividad, el entusiasmo y la carencia de fundamento doctrinario, propia del discurso populista, los partidos políticos tradicionales, particularmente Acción Democrática, se fueron nutriendo de una masa policlasista unida por una fe irracional, que identificaba el ardoroso mensaje populista con sus intereses y a éstos con los del partido.

"...el primer artículo de fe del mensaje populista es el de que el partido es igual al pueblo, y por tanto, el partido es el pueblo"(13).

Se iniciaba, de esta manera, un estilo de participación social canalizado sólo a través de los partidos políticos que, con el tiempo, instauró el régimen conocido como partidocracia. Este hecho, de naturaleza cultural, iba a reforzarse, posteriormente, con múltiples prácticas de segregación, hacia quienes no militaran en las filas partidistas. La afiliación al partido y la tendencia colectiva a privilegiar relaciones fundadas en la solidaridad o en la lealtad a los grupos primarios de pertenencia, hicieron rutinario el clientelismo, el nepotismo y el amiguismo, como mecanismos alternos de acceso a las oportunidades; pero, ensancharon también la enorme distancia que separa al Estado, en tanto que ente abstracto, de la sociedad civil, reforzada hoy, por falta de credibilidad general en los partidos políticos. Este último aspecto, es en la actualidad, uno de los elementos de mayor tensión en la estructura socio-política venezolana, por cuanto al no existir organizaciones intermedias de vinculación social, distintas de los partidos, para llevar adelante actividades diversas que pudiesen unificar voluntades e intereses, se ha exacerbado un individualismo(14) peligroso y castrante. Pero, mientras se consolidaba la democracia en torno a la retórica hueca de un mensaje cargado de promesas populares, se consolidaba, también, el nuevo rumbo de la conducción política, su nueva orientación en contraste con el precedente pensamiento político positivista que, apoyado en el atraso y la anarquía reinante en la Venezuela de ese entonces, consideró el acto de gobernar como un proceso civilizatorio.

"...Las tradiciones populares, pues, no podían tener cabida dentro de la constelación discursiva del positivismo. Ellas expresaban "atraso", "regresión", "violencia", "anarquía"; ellas encarnaban las fuerzas centrífugas y desintegradoras que tenían que ser controladas. Es por ello, que, para el pensamiento político positivista, el acto de gobernar fue concebido como un

acto “civilizador” llevado a cabo por “élites ilustradas” (15).

La “concentración” entre el primer gobierno democrático y los más diversos sectores representativos de la vida nacional, excluyendo a la izquierda, llevada a cabo en 1958 y conocida como el Pacto de Punto Fijo, dio fundamento a esa nueva orientación de la política. Las aspiraciones de armonía y convivencia pacífica entre los venezolanos, querían dejar atrás años de confrontación y pretendían neutralizar o al menos contrarrestar la lucha, que fuerzas contrarias ideológicamente iban a librar(16).

La identificación del pueblo con el partido, bajo la demagógica ficción de que el partido es el pueblo, permitió a su vez, la identificación del partido con el Estado. El Estado pasó a ser así el partido grande y los recursos de éste, patrimonio de quien lo dirigen. Este proceso, configuró una de las expresiones más sobresalientes de nuestra cultura política, dando lugar a una extraña racionalidad, en la cual, son socialmente aceptados, como irremediables, los designios de un “orden de cosas” caótico. Los privilegios, el despotismo gubernamental, la promoción social con apoyo partidista, la corrupción impune(17) y la arbitrariedad, pasaron a formar parte de la vida cotidiana, gracias a la retroalimentación patológica entre dirigentes y dirigidos, que deriva de una cosmovisión común muy sui géneris (18).

Esta nueva “lógica nacional”, eliminó el enorme conflicto que había prevalecido entre las masas desarraigadas y las élites políticas décadas atrás, cuando, a nivel popular, se identificaba al Estado con las castas oligárquicas que lo representaba.

La conjunción Estado-partido con su carga de desviaciones y su convalidación social, parece surgir en Venezuela de la constitución histórica, de un ethos de la subjetividad contrario al orden normativo objetivo “...**que pone su realización, no en el trabajo productivo ni en el esfuerzo racional, sino en la acertada ubicación en el marco de las relaciones de las que se puedan derivar ventajas sociales. En este contexto, los modelos altamente estimados son el héroe inalcanzable o los caudillos...**”(19). Modelos éstos, suplantados en el populismo y en la partidocracia por el líder carismático y dominante, en cuyas manos, se deposita la solución mesiánica de los problemas. Esta situación, probablemente se refuerza con otros rasgos inherentes al carácter psicosocial del venezolano(20), tales como: a). la tendencia a desviar el conflicto con la realidad a través de conductas a veces adaptativas y otras arbitrarias, regidas por una moral muy personal, ajena a las normas, y b). La primacía que tienen los anexos establecidos por contacto directo, que conjuran la instalación de amplias redes de solidaridad y de complicidades.

Con la institucionalización de las prácticas clientelares, se institucionalizó también un estilo democrático de participación restringida que acabó por desnaturalizar la esencia de la ciudadanía. La figura del militante o simpatizante de cualquiera de los partidos mayoritarios suplantó a la del ciudadano. Esto propició una fuerte exclusión ideológica que conjuntamente con la migración económica y cultural, alentó la diferenciación social y permitió a los partidos políticos manipular y controlar cualquier manifestación organizativa de la sociedad. Paulatinamente su soporte ideológico y doctrinario, sufrió una mengua considerable, mientras en la sociedad se operaba un complejo proceso de transformación, que iba a poner de manifiesto la incapacidad del régimen político democrático representativo, para unificar la voluntad colectiva en torno a un proyecto común. Sin embargo, en el presente, aún cuando se ha propagado el rechazo hacia

las instituciones políticas(21) y sus representantes, todavía la vía electoral sigue siendo el eje central de la actividad política del país, debido al amplio margen de pasividad y de corrupción existentes.

Con la polarización de fuerzas en torno a los dos partidos políticos mayoritarios y la concreción del fenómeno bipartidista, el Estado comenzó a crecer de manera incontrolada a través del aparato burocrático administrativo, satisfaciendo compromisos, pero a la vez, respondiendo a una racionalidad muy acorde con el proceso de acumulación de capital, de la estructura de clases y de la dependencia externa.

"...Podría demostrarse, por ejemplo, que el fenómeno de la corrupción política y administrativa, es expresión de una forma de acumulación muy característica y cuantitativa, nada despreciable dentro del proceso venezolano de acumulación. Podría demostrarse que la incapacidad de la administración para formular e implementar una política industrial, responde a intereses muy concretos de los sectores dominantes del capital. Podría demostrarse también, que la falta de eficiencia en la administración de los recursos, guarda una estrecha relación con la ausencia de una burguesía dominante y con el origen de los recursos fiscales"(22).

Bajo esta lógica, la ineficiencia, la improductividad y la dilapidación marcaron la pauta de la convivencia democrática, entre un Estado(23) y una sociedad pasiva que se acostumbró a participar limitadamente y con severas desigualdades, de la distribución de los ingresos petroleros. Por consiguiente, una economía dependiente, profundamente desarticulada y orientada hacia la demanda, con un patrón de consumo deformado por hábitos culturales foráneos y por el frenesí de la posesión material ilimitada, como símbolo de status, poco a poco llevó a los venezolanos a asumir conductas pragmáticas y utilitaristas.

La ética colectiva prevaleciente hoy, bien podría resumirse en una "...regla(24) preferencial de conducta: maximizar las ventajas materiales para mí y para mi estricto grupo primario de pertenencia, suponiendo que todos los demás harán exactamente lo mismo"(25). No podía ser de otra manera cuando, la profundización de la crisis económica, a niveles no imaginados, ha hecho aún más antagónica las contracciones entre las expectativas sociales y los hechos. Todo pareciera indicar que el modelo rentista está agotado(26) y que de cara al futuro será preciso concebir una estrategia de desarrollo económico, alterna, viable y equilibrada. Pero el desgaste humano sigue ahí, regido por actitudes culturales atávicas reproducidas en las formas de organización sociopolítica, sin un deslinde cualitativo de cuales aspectos de la tradición conviene desechar por su inoperancia para cohesionar una vida comunitaria. Paradójicamente, la sociedad venezolana, en mucho olvidó ese horizonte de ritos y representaciones que fundamentan la pertenencia y la identidad, mientras, se ha inoculado hasta la raíz del ser social(27), una pobreza humana integral, heredera de un modo común de hacer política, que en Venezuela se llama democracia.

II Del Estado a la Pobreza

Sobre las bases de la abundante riqueza petrolera, el Estado se constituyó en el rector de la vida económica nacional, reforzando su presencia con la expresión del gasto

público(28) dirigido, en una primera etapa, al proceso de modernización del país. Es así como, desde la instauración del régimen democrático, se operan rápidas transformaciones, iniciadas ya unas décadas atrás, que modifican sustancialmente el rostro de la Venezuela rural(29). La economía mantuvo su carácter rentista(30) gracias a los elevados ingresos petroleros y al nivel de las reservas internacionales, sin que se propiciase una adecuada diversificación del aparato productivo.

El incremento del gasto público y la expansión del aparato burocrático del Estado, fueron siempre una constante hasta alcanzar su clímax a partir de 1973(31), cuando, como consecuencia de la descomunal suma de dinero que percibió el país luego de la guerra del "Yom Kippur", los ingresos ordinarios del Estado aumentaron en un 165% con respecto al año anterior, y el comportamiento del gasto público estuvo guiado por el despilfarro extravagante y la ostentación. En este período (1973 – 1978)(32) de abundancia y derroche sin precedentes(33), germinó el ciclo de desequilibrios que heredarían los años subsiguientes, debido a la contracción progresiva del ritmo de crecimiento económico. La práctica del endeudamiento externo, para paliar los reiterativos desequilibrios de la balanza de pagos, y el déficit fiscal derivado del crecimiento acelerado del gasto público, se hizo en lo sucesivo rutinaria. La deuda externa creció así exponencialmente, pasando de unos 10.900 millones de dólares USA en 1978 a unos 27.000 millones de dólares USA en 1983. En febrero de este último año, como consecuencia de la baja de los precios del petróleo en el mercado internacional y la masiva fuga de divisas que amenazaba el nivel de las reservas internacionales, se impuso un régimen de cambios diferencial, tras diecinueve años con un sistema de tipo cambiario fijo y de libre convertibilidad de la moneda. Sin embargo, aunque Venezuela entraba de lleno en la crisis económica, la década de los ochenta transcurrió sin el diseño de políticas coherentes para enfrentarla y con altísimos niveles de corrupción(34). Se consideró prioritario cancelar la deuda externa(35) para, paralelamente endeudarse aún más; no se frenó la fuga de capitales y la economía se contrajo a niveles críticos(36), mientras que los precios del petróleo en el mercado mundial, caían abruptamente. Bajo estas condiciones se suscribió en 1989 un convenio con el FMI, para llevar adelante un programa de ajustes macro-económicos, que produjo un violento rechazo popular con el triste saldo de varios centenares de muertos y heridos. Pese a esto, el programa de ajuste siguió su curso y con él la intensificación de los sacrificios sociales(37). Después de los sucesos que suscitaron los intentos fallidos de Golpes de Estado del 4 de Febrero y 27 de Noviembre de 1992, respectivamente, se interrumpió dicho programa y Venezuela ingresó en un período de gran convulsión social que condujo, en Mayo de 1993, a la revocatoria de mandato del Presidente de la República, Carlos Andrés Pérez. El costo social de las improvisaciones, errores y omisiones de la administración del país hasta este momento, se expresa en un aumento de los niveles de pobreza. Según AGROPLAN(38) entre 1984 y 1988, la pobreza extrema se elevó del 11% a 14% y la pobreza total de 36% a 46%. Estos niveles empeoraron, después de la aplicación del programa de ajustes, para ubicarse en 30% en 1989 y en 34% en 1991 en cuanto corresponde a la pobreza extrema, y en 68% en relación a la pobreza total. Los programas sociales(39) puestos en práctica se tradujeron en un aporte en dinero o en especie (beca alimentaria y beca láctea), que dado el deterioro general de las condiciones de vida, resultó muy insuficiente. El gasto social per cápita entre 1989 y 1991, se estima que descendió a sus más bajos niveles desde 1968(40). De igual manera, aumentaron significativamente los niveles de desnutrición; reaparecieron enfermedades antaño erradicadas y subieron las tasas de mortalidad y

mortalidad infantil. En 1993(41) se inició la recesión económica con un descenso del PIB (Producto Interno Bruto) del 0.4%, que en 1994 alcanzó un crecimiento negativo del 3.3%. Este último año fue particularmente traumático para la economía venezolana debido a la crisis(42) de gran magnitud del sistema financiero y la incapacidad del Estado para manejarla. Esta crisis, que le costó al Estado 1.2 billones(43) (millones de millones) de bolívares, en salvamento de los bancos, financiado mediante emisión monetaria, se tradujo para la sociedad venezolana en grandes sacrificios, cuyas consecuencias, aún están presentes. El cuadro económico se descompuso enormemente con la contracción económica(44), la tasa de desempleo, según cifras extraoficiales, se situó entre el 13 y 14% mientras que el empleo informal llegó a representar el 52% de la fuerza de trabajo empleada(45) y la tasa de inflación fue del 70.8%(46). Dado el deterioro del bolívar frente al dólar durante el primer semestre del año, de casi un 40% entre Mayo y Junio, se produjo una masiva fuga de capitales y las reservas internacionales cayeron en 3.700 millones de dólares, hasta que el gobierno, a fines de Junio, decretó un control de cambios y fijó la paridad cambiaria en Bs. 170, 00 por dólar(47).

Por otra parte, el gobierno aumentó considerablemente la carga tributaria interna, trasladando a la sociedad el peso de sus errores, pero al mismo tiempo, eludió la reestructuración del Estado(48) e incrementó la burocracia y el gasto público. Con este legado, en 1995, empeoraron los indicadores económico-sociales y se sobrecargó a una población —muy afectada por la inercia inflacionaria— con nuevos ajustes tributarios, con aumento en el precio del combustible y con una nueva devaluación de la moneda, que ubicó la paridad cambiaria en Bs. 290,00 por dólar(49). Además, la resaca de la crisis bancarias se hizo sentir duramente, por cuanto una buena porción de las ayudas otorgadas en Diciembre de 1994, fueron pagadas en 1995. Según el informe PROVEA(50) mientras **“...el porcentaje del presupuesto del gasto total de la administración pública destinado al pago del servicio de la deuda pública, (había) venido incrementándose desde 1989, cuando representaba el 20% hasta ubicarse en 40.81% en 1995... los programas sociales... apenas (representaban) el 1% del presupuesto nacional”**(51). Para 1995(52) el 73% de la población se encontraba en una situación de pobreza, de la cual, el 40% correspondía a la categoría de pobreza extrema. Desde Diciembre de 1993 hasta Julio de 1995, el salario real del venezolano había caído en 53.41%; la tasa de desempleo era del 11.5% de acuerdo con la OCEI(53), y del 17% de la masa laboral de acuerdo con Fedecámaras(54) (1.119.000 personas sin trabajo); el sector informal, que incluye a los trabajadores por cuenta propia y a los establecimientos con menos de cinco empleados, representaba el 48.3% (3.680.835 personas) de la población económicamente activa (60% en 1996), totalmente excluidos de los servicios de asistencia social; el déficit habitacional era, según cifras de CONAVI(55), de 1.441.000 viviendas; el gasto público en salud fue de 112 dólares per cápita en 1993 y apenas de 50 dólares en 1995(56) en seis años, la inflación acumulada afectó los precios de los medicamentos incidiendo en un aumento, hasta 1995, del 1.040.70% y el precio promedio por medicamento subió de 1.34 dólares por unidad en 1989 a 7 dólares en 1994. Por otra parte, la cobertura de la precaria seguridad social, sólo alcanzaba al 37.95% de la población; más del 42% de la población en edad escolar estaba fuera del sistema escolar; había más de dos millones de jóvenes desocupados(57) sin estudiar y sin trabajar; sólo el 18.84% del presupuesto nacional se destinaba a educación(58); el 26% de los productores agrícolas y el 40.5% de la población indígena, eran analfabetas.

Esta situación de los derechos humanos en Venezuela, se tornó más adversa en el curso de 1996, cuando, debido a la debacle económica, el Gobierno Nacional suscribió(59) un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional conocida como Agenda Venezuela, para llevar adelante un nuevo programa de ajustes macro-económicos que eliminó todo género de controles; devaluó la moneda levantando el control de cambios cuya paridad hoy oscila alrededor de los Bs.475 por dólar; incrementó sustancialmente el precio de los combustibles(60); aumentó la carga tributaria; liberó las tasas de interés y desató una inflación galopante. Con ello, la pobreza se ha expandido hacia sectores cada vez más amplios de la sociedad.

Un estudio de Datanálisis, por ejemplo, reveló que el 53.76%(61) de la fuerza de trabajo, percibe un sueldo mensual que oscila entre Bs. 1.500 y 50.000, cuando, para cubrir sólo los gastos de alimentación y transporte, en el mes de Abril, antes de la aplicación de las medidas de ajuste, se requerían como mínimo Bs. 53.310(62). Esto significa, que al no poder satisfacer sus necesidades básicas, el 81% de la población venezolana (4.5 millones de hogares) transita, con diversa intensidad, los límites de la precariedad material.

Finalmente, debe resaltarse, que el proceso de empobrecimiento y la erosión sistemática de la calidad de vida en Venezuela se potencia, debido al deterioro que han sufrido a su vez los servicios médicos-asistenciales(63); educación; oficinas públicas y seguridad personal, entre otras, alguno de los cuales, han entrado en una situación de auténtico colapso.

Consideraciones Finales

El credo neoliberal que con algunos matices domina hoy el pensamiento económico mundial, tiene ya sin embargo muchos detractores, economistas, empresarios y políticos de los países industrializados, así como, organismos e instituciones internacionales(64), han expresado su crítica hacia un modelo de desarrollo que convalida la riqueza creciente de unos pocos y la acentuada pobreza de las mayorías. De este espectro de crítica y de los aportes de destacados expertos, intelectuales y políticos de los países del sur, han surgido ciertos parámetros mínimos para concebir un nuevo modelo de desarrollo económico, con cuyos resultados materiales, pueda construirse una sociedad más justa y más democrática, basada en pluralismo cultural. Este modelo de desarrollo alternativo participativo con el cual pueda reemplazarse al modelo neoliberal, se debería articular en torno a:

1. El Estado, redimensionado en sus límites de actuación, en su tamaño y en su funcionamiento administrativo.
2. El mercado, reorientado hacia las grandes directrices del desarrollo económico que se definan, y controlado para corregir las desigualdades y desequilibrios que en él, pudiesen generarse.
3. Los actores sociales, organizados en términos reales de participación, sobre la base, de la solidaridad y del consenso.
4. La equidad distributiva, la justicia social, y la tolerancia.
 5. La construcción cultural de la democracia, a través, de una nueva cultura política integradora en lo simbólico, pero, respetuosa, de las identidades individuales, en términos, de reciprocidad y de solidaridad.

Bajo este esquema, el Estado tendría a su cargo el establecimiento de las grandes directrices del desarrollo económico y social, cuyas modalidades y objetivos, serían definidos conjuntamente con los actores sociales y actuaría sobre el mercado para corregir sus distorsiones; establecería y garantizaría para todos los ciudadanos, un adecuado sistema de seguridad social, con cobertura en materia de salud, educación, pensiones por vejez, jubilación e incapacitación, ayudas para la obtención de viviendas, etc; coordinaría la formación de recursos humanos en concordancia con el sector universitario y el sector productivo; y, velaría, por el uso racional de los recursos naturales, con visión conservacionista y nacionalista. Los actores sociales, por su parte, promoverían una nueva institucionalización democrática tendiente a conservar el orden y la estabilidad, mientras se opera la construcción de una nueva cultura política, articulada, en torno a la participación y a la representación ciudadana, que incorpore, a los sectores sociales excluidos, sobre la base de una ética solidaria.

Un proceso de tal envergadura, por su alcance, presupone entonces una transformación radical del orden existente y por ende, una hermosa utopía de difícil concreción, aunque la simple proximidad teórica con estas aspiraciones, permite recobrar el sentido humanista que evidentemente debe prevalecer en la reflexión sobre la vida y sobre la dignidad del hombre. Abordar sin tapujo la cara moral de la pobreza, un problema ético que hoy estremece a la conciencia humana, implica, a su vez, redimensionar la política, para que ésta, pueda producir soluciones igualmente éticas.

Cuando se habla de desarrollo económico, se está hablando del grado y del modo como una economía puede satisfacer las necesidades básicas de la población y expandir su potencial productivo, con un amplio margen de autonomía nacional. Se pregunta entonces para quienes se produce, qué es lo que se produce y cómo se distribuye.

Sabemos que la respuesta que actualmente podemos darnos, hacen necesaria una ética del mercado y de la política que orienta la organización social y los resultados materiales de la producción, hacia la satisfacción de las necesidades humanas básicas y hacia la distribución equitativa de las oportunidades. El desarrollo no puede ser un proceso lineal, imitativo y universal, sino, particular y autodependiente, para que, respetando las potencialidades del medio ambiente natural y cultural, de los recursos y de la riqueza que supone la imaginación social cautiva, cada país, diseñe las vías que considere más idóneas, para impulsar un proyecto nacional autónomo y soberano.

Sabemos también que las políticas neoliberales, son concebidas para impulsar el crecimiento económico y no su transferencia social en procura del bienestar colectivo; pero el producto interno bruto –PIB, si bien pueden medir transacciones, es decir, valores de cambio, no expresa nada con respecto a los valores de uso, o sea, en relación con las necesidades humanas.

Es así, como, aceleradamente, se introducen elementos cada vez más distorsionantes que llevan a la fragmentación social la exclusión, la pobreza y la ingobernabilidad política. Por ejemplo, el alarmante crecimiento del sector informal de la economía que en Venezuela, representa en 1996, al 60% de la población económicamente activa, y marginamiento del aparato productivo. Cuando los asuntos sociales son visualizados como meros asuntos técnicos, la política queda reducida a la simple elección formal entre varias alternativas, de aquella, que represente el óptimo buscado. Con ello, la

muy discutible neutralidad de la racionalidad medio – fin, mediante, la cual se elige, privatiza el ámbito de las decisiones y acentúa el distanciamiento entre los políticos y la sociedad.

Ahora bien, ante una panorámica de fuerzas centrífuga opuestas, en tensión y absolutamente desintegradoras ¿Cómo se lleva a cabo una reconstitución de las estructuras socioeconómicas y socio-políticas en un país con un proyecto neoliberal en pleno desarrollo, con una enorme atomización cultural y con amplios márgenes de incertidumbre y violencia? ¿Cómo se cohesionan una unidad identitaria nacional, con fuerza suficiente para motorizar la organización de los actores sociales, que a su vez impulse un importante giro en la orientación del desarrollo económico y social?. El tejido sociocultural venezolano pareciera estar muy maltrecho para responder en su heterogeneidad, sin graves confrontaciones sociales de consecuencias impredecibles, a una redefinición viable de los mecanismos de participación y representación política, que legitimen la democracia. Por otra parte poderosos intereses a defender tanto en el plano nacional (65) como en el internacional(66) hacen prever una ausencia absoluta de voluntad por parte de la elite dirigente(67) en lo político y en lo económico, para modificar el rumbo neoliberal del desarrollo y los estilos políticos y modalidades institucionales que hasta el presente se han impuesto. Se impone entonces un cambio de mentalidad, pero, incorporar a la educación formal y a los medios de comunicación de masas al desarrollo de las destrezas productivas del hombre y a la creación de una racionalidad creativa y autónoma, que sume voluntades en la tarea de construir nuevas formas de socialización, con fundamento en la equidad y que reedifique la escala de valores pervertida, por la industria cultural del consumo totalizante, aunque es una maravillosa aspiración, habrá de encontrar innumerables obstáculos interpuestos por los fabricantes de miseria humana. Y sin estos dos elementos, que constituyen el instrumental básico para promover cualquier transformación sociocultural, parece inviable acceder a la concreción de esta utopía. Por ello pienso, que aunque es imperativo encauzar esta suerte de diáspora colectiva que ha desatado el nudo normativo y simbólico, que nos mantenía unidos alrededor de ciertas certezas fundamentales, no pueden soslayarse las fuerzas contrapuestas que se oponen en la práctica a la sincronización de voluntades y las expectativas de cambio.

25. Banfield, E.C. **"The moral basis of a backward society"**, The Free Press of Glencoe, Illinois, 1968, cap. V, citado por Mikel de Viana, S.J. op cit. Pág. 129.
26. Aunque esto aún está por verse, debido a los constantes conflictos en el Golfo Pérsico, que continúan aportando a la economía venezolana, jugosos ingresos extraordinarios por concepto de petróleo, cuya administración sigue siendo una fuente de despilfarro.
27. Hay un gran desarraigo hacia el valor de las tradiciones, el folklore, las costumbres y la historia nacional, sobre todo en la población joven.
28. Los gastos corrientes de la administración pública representaron, en 1958, una cifra del orden de los 6.300 millones de bolívares que pasó a 7.282 millones de bolívares en 1969 y a 11.465 millones de bolívares en 1973. En materia de gasto público básicamente keynesiana.
29. Para 1920, más del 75% de la población se ocupa de las labores del campo. En 1930, sólo un 17% de la población vivía en centros poblados de más 2.500 habitantes. Ya en 1980 más de 76% de la población vivía en comunidades de más de 10.000 habitantes. En 1920, la expectativa de vida apenas alcanzaba los 34 años, proliferaban las enfermedades, el 75% de la población era analfabeta, y el producto nacional por habitante era apenas unos 147 dólares (dólares USA 1970). Datos tomados de Toro Hardy, José. **"Venezuela, 55 años de política Económica. 1936-1991. Una autopía Keynesiana"**. Editorial Panapo, Caracas, 1992.
30. En 1950, los ingresos petroleros representaban el 46% de los ingresos fiscales ordinarios; en 1970 ese porcentaje asciende a 60% y en 1990, alcanzó el reto histórico de un 80%. Ver Purroy, M.I., **"Perspectiva Económica 1994"**. El Diario de Caracas, 03-02-94.
31. Los ingresos ordinarios consolidados no financieros (no incluye el endeudamiento externo), pasaron de unos 23.000 millones de bolívares en 1973 a aproximadamente 53.000 millones de bolívares en 1974, para posteriormente estabilizarse en los tres años siguientes en una cifra del orden de los 54.000 millones por año.
32. En 1976, la reversión anticipada de las concesiones petroleras, cuyo vencimiento estaba previsto para el 1983 así como la nacionalización de la industria del hierro, dieron un papel protagónico al Estado en la vida nacional como propietario y administrador de la mayor parte de los medios de la producción.
33. El Estado acudió al endeudamiento externo indiscriminado aumentando así la masa de recursos disponibles, la cual se situó en 1978 (incluyendo ingresos extraordinarios e ingresos de origen financiero), en la espectacular suma de 126.347 millones de bolívares.
34. Durante el gobierno de Jaime Lusinchi (1984-89), con la creación de la Oficina del Régimen de Cambios Diferenciales y el otorgamiento, con amplia discrecionalidad por parte de los funcionarios a cargo de su administración, de divisas preferenciales,

se desató un proceso de corrupción calculado en unos 15.000 millones de bolívares.

35. Sólo entre 1984 y 1987, el sector público canceló a la banca acreedora alrededor de 4.600 millones de dólares USA, por concepto de amortización de la deuda pública.
36. El déficit del sector público consolidado en 1988 se había ubicado alrededor de los 75.000 millones de bolívares, lo cual según el FMI, representaba un 6.3% del PIB pero el déficit fiscal global alcanzó un nivel equivalente al 51.1% del PIB; la deuda externa superaba los 26.700 millones de dólares USA; las reservas internacionales en un país altamente dependiente de las importaciones, se ubicaron en una cifra estimada del orden de los 7.000 millones de dólares USA y la inflación era de casi un 30%.
37. El PIB per cápita en 1990 (Bs. 23.832,6), llegó a ser inferior que el que existía en 1988 (Bs. 26.023,6), a precio de 1984, pese al crecimiento experimentado por el PIB en 1990.
38. Datos tomados de Lander, Edgardo, "**Neoliberalismo...**", op. cit., pág. 124.
39. Debido a las devaluaciones, la beca alimentaria pasó de 12.50 dólares mensuales en 1989 a menos de 5 dólares, al cerrar el año 1993. Ver, Sabino, Carlos, "**De cómo un Estado Rico nos Llevó a la Pobreza**", Editorial Panapo, Caracas, 1994, pág. 89.
40. Márquez, Gustavo, "**Pobreza y Políticas Sociales en Venezuela**", Simposio IESA-Corpoven, tomado de Lander, Edgardo, op. cit., pág. 124.
41. Para 1993, las industrias básicas del país representaban una carga deficitaria en el Presupuesto Nacional del orden de los 120.000 millones de bolívares al año. Ver, Capdevielle, Edgar "**Bienestar Para el Pueblo**", op. cit., pág. 36.
42. Como consecuencia de esta crisis financiera el Banco Central de Venezuela se encuentra hoy completamente descapitalizado. En su último balance, aparece con un saldo negativo, por lo cual es imposible que pueda cumplir la misión de reordenar el régimen monetario. Ver, Oropeza, José Luis "**La Crisis Bancaria en Perspectiva**", Revista SIC, N° 586, Año LIX, Centro Gumilla, Caracas, Julio 1996, pág. 250 y siguientes.
43. Puesta en términos relativos esta cantidad, calculada el tipo de cambio de cada mes de asistencia financiera, equivale a 8.900 millones de dólares, es decir, a siete meses de exportaciones petroleras del año 1994; es decir, a un 60% de las exportaciones totales de ese año; es decir, al 16% del PIB del 1994; es decir, a un sexto de la producción nacional de bienes y servicios. Ver Espinoza Ramón y Peraza Javier "**Resultados Económicos del 1995**". Revista SIC, N°. 581, Año LIX, Centro Gumilla, Caracas, Enero-Febrero 1996, pág. 4.
44. La caída de la demanda interna en 1994 afectó al consumo y a la inversión, con particular énfasis a la inversión privada que cayó en un 20%. El desempleo, en

consecuencia, se propagó. Ver Purroy, Miguel Ignacio “**Balance 1994 y Perspectiva 1995**”, Revista SIC, N°. 571, Año LVII, Centro Gumilla, Caracas, Enero-Febrero 1995, pág. 97.

45. Idem, pág. 27.
46. Apenas 11% de los productos que conformaban la cesta básica de consumo, estaban sujetos a débiles controles de precios.
47. El año 1994 cerró con una devaluación del 60% y con una sobrevaluación acumulada del bolívar del 17% (diferencial de inflación con la economía estadounidense del año 1993 y el año 1994). Idem, pág. 27.
48. Un Estado hipertrofiado que administra está conformado por más de un millón de empleados públicos con altos niveles de ineficiencia y corrupción.
49. Después de esta devaluación, el Ministro de Hacienda, haciendo caso omiso de los enormes costos sociales que la misma implicó, admitió públicamente que se tomó la medida por un error de cálculo imputable a los especialistas del Banco Central de Venezuela; aún así, no se establecieron responsabilidades.
50. Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos, creado en 1988, que anualmente elabora un minucioso informe sobre la situación de los derechos humanos de Venezuela.
51. Wyssenbach, Jean Pierre “**Informe PROVEA 1995**”. Revista SIC, N°. 581, Año LIX, Centro Gumilla, Caracas, Enero-Febrero 1996, pág. 20.
52. Todos los datos que se expresan a continuación para el año 1995, fueron tomados de Wyssenbach, Jean Pierre “**Informe PROVEA ...**”, op cit., pág. 20,21,22 y 23
53. Oficina Central de Estadísticas e Informática.
54. Federación de Cámaras de Comercio y Producción.
55. Consejo Nacional de la Vivienda.
56. Más de 100.000 empleados trabajan en el Ministerio de Sanidad y Asistencia Social que representaba el 75% de su presupuesto. El 51% era personal obrero, gracias a las políticas clientelista.
57. De un total de más de cuatro millones de jóvenes, sólo 1.631.396 eran estudiante regulares. Del resto, 2.320.966 no asistían a un centro de enseñanza y 64.753, nunca habían asistido a él.
58. La UNESCO considera necesario, un mínimo equivalente al 25%.
59. En Abril de 1956.

60. Gasolina popular en 800.64% gasolina media en un 400.10% gasolina de alto octanaje en 300%; y diesel en un 900.66%. este ajuste de los combustibles se transformó de un nuevo impuesto para la población, por cuanto los recursos recaudados fueron destinados a paliar el déficit fiscal.
61. Sayago, Omaira, Diario El Nacional, Domingo 26 de Mayo de 1996, cuerpo E-Economía.
62. Por contraste, el sueldo base del presidente de Petróleos de Venezuela, es de Bs. 12 millones mensuales.
63. En el transcurso de 1996, por ejemplo, ha sido rutinario el cierre mensual de hospitales por carencia de recursos y material médico-quirúrgico, afectando incluso al servicio de emergencia.
64. John Kenneth Galbraith en su libro "The Culture of Contentment" (1992); el economista francés Michel Albert, presidente de la compañía AGF-Seguros Generales de Francia, en su libro "**Capitalismo contra Capitalismo**" (1991); Robert Reich, Ministro de Trabajo del Presidente Clinton en su obra "**Be Wealth of Nations**" (1991); el PNUD-Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo de la Infancia. Ver J. Chonchol "**La Ilusión Neoliberal**". Revista SIC, Centro Gumilla, N°. 584, Año 59, Caracas Mayo 1996 pág. 187-190.
65. Las mayores dificultades para el cambio se hallan en la red de complicidades que se han tejido en torno a los grupos poderosos quienes han usufructuado el modelo de desarrollo económico y la estructura socio-política durante el periodo democrático.
66. Con los planes de privatización y con el programa de apertura petrolera el capital internacional a penetrado intensamente en Venezuela.
67. La conducta irracional de la elite dirigente, en realidad, rayana en los límites del absurdo. Según María Sol Pérez Schael, la locura que identifica al universo simbólico manejado por el liderazgo nacional, puede catalogarse de "**Autismo Societario**", por cuanto, privilegia su poder por encima, incluso, de la racionalidad, hace plausible considerar que la sociedad venezolana está enferma. Tesis ésta, que comparto plenamente. Ver Pérez Schael, María Sol "**Petróleo, Cultura y Poder en Venezuela**". Monte Avila Editores, Caracas 1993, Pp. 10, 212 y 213.